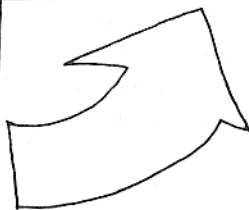
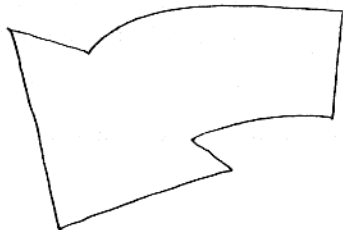
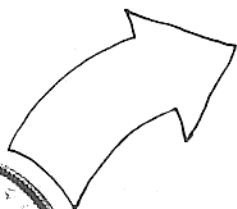


# Desarrollo capitalista periférico y las transformaciones políticas en la República Dominicana



**DESARROLLO CAPITALISTA PERIFERICO Y  
LAS TRANSFORMACIONES POLITICAS EN LA  
REPUBLICA DOMINICANA: 1965-78.<sup>1</sup>**

**Carlos María Vilas\***

I

La Guerra Civil de abril de 1965 y la invasión norteamericana a la República Dominicana pusieron en evidencia el carácter agudo de las contradicciones entre la pequeña burguesía urbana y las clases dominantes dominicanas —burguesía azucarera y tabacalera, grandes terratenientes y ganaderos, comerciantes de importación—. Con el auxilio no disimulado de la embajada norteamericana estas fracciones se apropiaron de manera directa e inmediata del aparato del Estado después de la muerte de Trujillo y de la salida del país de su familia y allegados, y mediante la confiscación de sus cuantiosas propiedades —Trujillo era, de hecho, el principal empresario capitalista del país— (Vilas, 1973), reorientó en su beneficio los mecanismos de acumulación que hasta entonces habían sido prácticamente monopolizados por el *Generalísimo*. Las masas urbanas y campesinas fueron testigos silenciosos del fin de un régimen que se había apoyado en la explotación más brutal durante tres décadas.

---

\* Profesor, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-MLATS).

Los pocos meses del gobierno de Juan Bosch marcaron un breve paréntesis democrático en el que las masas populares y la pequeña burguesía —sobre todo en la ciudad de Santo Domingo— buscaron definir formas propias de expresión política. Sin embargo, la dinámica misma del proceso provocó rápidamente la oposición de la clase dominante: las restricciones en materia de importaciones antagonizaron a sus fracciones importadoras; la política impositiva amenazó a los terratenientes; la manera en que se tranzó la cuestión de las reparaciones norteamericanas por las sanciones económicas impuestas a Trujillo creó conflictos con los productores privados de azúcar; el proceso de democratización y el ejercicio de las libertades populares levantaron el espectro de cambios radicales. Tras el derrocamiento de Bosch la clase dominante regresó al ejercicio directo del poder político, más nítidamente incluso que en 1962, y el carácter particularista y excluyente de su dominación generó conflictos crecientes con amplios sectores de la pequeña burguesía urbana y con fracciones menores de la burguesía comercial e industrial. La política desenfrenada de importaciones<sup>2</sup> redujo las de por sí exiguas posibilidades de expansión de la incipiente industria local; la lenta evolución de la economía impedía la ampliación del mercado de consumo interno; el atraso de la agricultura creaba desabastecimiento de alimentos, favorecía a su turno el aumento de las importaciones y fortalecía las presiones inflacionarias; y la falta de inversiones en el principal sector de exportación —el azucarero— ponía los costos de producción muy por encima de las cotizaciones en el mercado internacional. La dominación de estas fracciones aparecía enmarcada frente a las masas campesinas por la práctica de la beneficencia particularista y la instrumentación del compadrazgo. Pero en Santo Domingo, donde las nuevas corrientes de la política internacional, y en particular el influjo de la Revolución Cubana, entusiasmaban a grupos de intelectuales y de profesionales de la pequeña burguesía y se proyectaban progresivamente hacia las clases populares, el paternalismo era suplantado por la represión abierta.

Sin embargo, la guerra de abril no fue solamente el conflicto entre la pequeña burguesía urbana democrática y nacionalista que se expresaba fundamentalmente a través del PRD, y una clase dominante de la que un embajador norteamericano pudo afirmar que estaba retrasada "no cien, sino doscientos años" (Martín, 1966: 134). El enfrentamiento abrió una fisura por donde penetraron las masas populares urbanas, recientemente incorporadas a un proceso de rápida evolución política encabezado por aquellas fracciones de la pequeña burguesía, y transformaron lo que en principio parecía un alzamiento militar tradicional en una experiencia de guerra popular. La incapacidad

político-militar de la clase dominante para manejar por sí sola la crisis tuvo que ser paliada con la ocupación militar norteamericana.

El período abierto con esta ocupación —la segunda en el presente siglo— se caracteriza por cuatro aspectos básicos, mutuamente condicionados: 1) una intensa represión de las diversas expresiones de movilización y organización de las fuerzas populares; 2) acelerada expansión del capital extranjero, particularmente la configuración de un nuevo sector de enclave; 3) la "modernización" de la clase dominante en subordinación a la expansión extranjera —lo que en algunas oportunidades se ha denominado la conversión de la oligarquía en burguesía; 4) el avance económico de la pequeña burguesía, la paulatina transformación de algunas de sus fracciones en burguesía, y su progresiva incorporación al bloque de fuerzas en el poder. Este cuádruple proceso se ha desarrollado a través de variados modos de complementación entre el gobierno de los Estados Unidos, las empresas transnacionales, la clase dominante local, y el Estado dominicano.

El primero de los aspectos señalados tuvo como capítulo inicial el desarme, la eliminación física o el extrañamiento de las fuerzas armadas constitucionales y de los comandos populares que lucharon junto a ellas contra la invasión extranjera. Estos procedimientos comprendieron asimismo a otras formas no militares de oposición popular a la intervención norteamericana y posteriormente al gobierno del doctor Balaguer, hasta alcanzar su pico en los años 1970 y 1971, con la constitución de bandas armadas de ejecución, formalmente parapoliciales pero con la abierta tolerancia de algunas fracciones de las fuerzas armadas y de sectores de la burocracia balaguerista.<sup>3</sup> En el plano laboral, la represión desembozada llevada a cabo conjuntamente por el Estado y por las empresas de capital local y extranjero, fluctuó asimismo desde la eliminación física de los dirigentes y activistas sindicales, o su encarcelamiento o deportación, hasta la creación de entidades paralelas y sindicatos pro-patronales, cuando la negativa empresarial a la creación de organizaciones de clase no podía desactivar las presiones de la clase obrera. La participación de las corporaciones norteamericanas y de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos en estos operativos es conocida. Mientras duró la ocupación armada, las tropas norteamericanas toleraron —y según muchos observadores, instigaron— la eliminación física de las figuras más prominentes de las fuerzas populares.<sup>4</sup> Posteriormente el gobierno norteamericano ha canalizado importantes recursos para la implementación de la política represiva; de acuerdo a un autor, entre 1968 y 1972 solamente, el USAID Public Safety Program destinó al gobierno dominicano casi tres millones de dólares (Moreno, 1976).<sup>5</sup> La intensidad del

compromiso del gobierno del doctor Balaguer con esta política surge de la comparación de los presupuestos domésticos involucrados. Mientras en el momento de mayor intensificación de la represión (años 1960 y 1961) la dictadura de Trujillo destinó como máximo un 29% de su presupuesto de gastos al rubro seguridad y defensa, el presupuesto operativo (gastos de personal, bienes y servicios) de dicho rubro del gobierno de Balaguer pasó de algo menos de 24% en 1969 a 33.4% en 1973 (54.7 millones de pesos dominicanos), 34.7% en 1974 (68.6 millones), 35.8% en 1975 (78.9 millones), 36.1% en 1976 (87.7 millones), y 36.8% en 1977 (94.5 millones).<sup>6</sup>

El indudable triunfo de esa faz preliminar de "pacificación", la disponibilidad de una fuerza de trabajo con muy altos índices de desempleo y subempleo, débilmente organizada y muy barata, y una legislación que brinda garantías y condiciones operativas sumamente generosas, favorecieron un sostenido ingreso de inversiones extranjeras directas, sobre todo norteamericanas. Entre 1966 y 1977 se radicaron 576.3 millones de dólares<sup>7</sup> en tres sectores principales de actividad: minería, industrias de montaje, hotelería y turismo.

La formación de enclave, que se había diluído a causa de la compra de casi toda la industria azucarera —comprendidas las plantaciones de caña— por Trujillo, reapareció en la etapa post-1965 con la expansión de las actividades mineras. Las exportaciones de este sector crecieron de un promedio anual de 13.8 millones de dólares en 1967-69 a 121.4 millones por año en 1973-75, habiéndose estimado en alrededor de 190 millones en 1976; de 8% del valor de las exportaciones del país en el primero de los trienios mencionados, subieron a casi 25% en 1976. Tres corporaciones transnacionales —ALCOA (bauxita), Falconbridge (ferróníquel) y Rosario Mining (oro)— dan cuenta de 99% del volumen físico de la producción sectorial y del valor de las exportaciones respectivas. El carácter de enclave de la actividad surge de inmediato: entre 1966 y 1976 solamente un tercio del valor exportado retornó al país, y solamente 25% si se excluye a la Rosario Mining, que por razones de reciente constitución y de participación accionaria del Estado ha seguido en los primeros años de su actividad una política diferente; entre 1960 y 1976 las tres empresas pagaron en concepto de impuestos aproximadamente 10% de sus ventas totales apenas —ventas sobre cuyo monto real el estado dominicano carece en realidad de controles efectivos. El empleo generado es de 3,000 personas, incluidos los técnicos extranjeros (Estados Americanos, s.f.; Malagón, s.f.; *La Noticia*, 30 dic. 77).

A partir de 1968, la industria de montaje para la exportación recibió una inversión de algo más de US\$44 millones y generó poco más de 12,000 puestos de trabajo —en su mayoría desempeñados por mujeres— con salarios bajísimos; a principios de la década actual una de las zonas de montaje publicitaba internacionalmente salarios de 60¢ de dólar la hora, pero para la misma época la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana calculaba el salario mínimo, en las plantas de montaje, entre 35 y 50¢ la hora. Los ingresos

provenientes del turismo, por su lado, sumaron casi 290 millones de dólares entre 1970 y 1976; la casi totalidad de los turistas provino de los Estados Unidos. La inversión hotelera y en actividades conexas ofrece una marcada participación de capitales norteamericanos, en particular la corporación Gulf & Western.

Frente a esta rápida diversificación de las inversiones extranjeras, la producción de azúcar ha perdido relevancia como asiento de la actividad del capital foráneo. Sólo una corporación extranjera opera en ese sector —la ya mencionada Gulf & Western, norteamericana—, y a su turno ella se encuentra embarcada en un amplio proceso de diversificación de sus operaciones en el país: producción de cemento, ganadería, hoteles y turismo internacional, espectáculos, etc. (del Castillo, 1974). De todas maneras el Central Romana, propiedad de la corporación, es el más moderno de los que existen en actividad y genera alrededor de un tercio de la producción de azúcar, aunque ello no representa más que un quinto del valor de facturación de las actividades locales conjuntas de la corporación.

Tras el asesinato de Trujillo todas sus empresas fueron confiscadas y pasaron a constituir patrimonio del Estado, que se convirtió así en el principal propietario del país, particularmente en el sector más importante de la economía —las plantaciones de caña y la producción de azúcar, con 12 de los 16 ingenios y centrales. A partir de 1966 el sector público se erigió como núcleo de dinamismo de la nueva etapa. Entre ese año y 1975 la inversión pública creció 4.6 veces, y su participación en el producto pasó, en precios constantes, de 3.9% a 9%, a pesar de que en el mismo lapso el PNB duplicó su magnitud. El mayor aumento se registró en el rubro construcciones (más de cinco veces), que representó cuatro quintas partes de la inversión pública (cf. el cuadro 1).

En materia de empleo se experimentó una ampliación similar, y a comienzos de la presente década el sector público ocupaba alrededor de 150,000 personas, vale decir 7% de la población activa y casi 10% de la población ocupada. Tan marcada como la ampliación de la actividad económica del Estado fue la centralización del gasto y del empleo en la cúspide del poder ejecutivo: 80% promedio del empleo público fue generado durante la década actual por el gobierno central; 90% de la inversión real, y más de 95% de la inversión en construcciones fue directamente desembolsada por la presidencia de la república.<sup>8</sup>

Durante la presidencia del doctor Balaguer el poder ejecutivo devino así el adjudicador de ingentes recursos, y a través de procedimientos de índole variada —permisos especiales de importación de bienes, adjudicación directa de contratos de obra, otorgamiento de exenciones impositivas, créditos especiales

otorgados por la banca pública, apropiación privada de fondos públicos, manipulación de los premios de la lotería y similares— se convirtió en la base de la acumulación de capital de una nueva burguesía, militar y civil —pero estrechamente ligada siempre a los aparatos de Estado—, que halló en su cooperación política con el titular del poder ejecutivo una forma de abrirse paso en el mundo de los negocios. Es cierto que este sistema significó dar cauce a una extendida y entusiasta red de corrupción, peculado, etc., prácticamente en todas las instancias y dimensiones de la vida pública —como periódicamente lo reconocía, y publicitaba el propio presidente Balaguer—;<sup>9</sup> pero al margen de consideraciones jurídico-legales, la corrupción funcionó, dentro de ciertos límites, como un instrumento objetivo de acumulación personal. El Estado actuó como el proveedor de fondos, información, asistencia técnica, influencia, recursos humanos y materiales, para la iniciación o la prosecución de una carrera exitosa en la industria, los servicios, el comercio, sin exigir más que la lealtad política de los beneficiados hacia el titular del poder ejecutivo y su más inmediato *entourage*. Al mismo tiempo, la ampliación del empleo público, especialmente en los escalones inferiores de la pirámide administrativa central y en las empresas del Estado, es una economía privada con reducidas posibilidades de empleo, apareció como una de las pocas perspectivas de ingreso más o menos estable para las masas urbanas y para las capas inferiores de una vasta pequeña burguesía de oficinistas, gentes de oficio y profesionales. Los planes habitacionales del gobierno permitieron el acceso a una vivienda a los más afortunados —vale decir, los más efusivos en su adhesión al régimen. La derivación de recursos públicos y privados hacia las agencias de beneficencia oficial —particularmente la *Cruzada del amor*, presidida por una hermana del doctor Balaguer—, constituyó la forma paternalista y particularista de la seguridad social para una masa flotante de semiproletarios, desocupados, buhoneros, prestadores de seudoservicios personales, etc., que compone el elemento cuantitativamente predominante de la población urbana y la base prepolitizada de la clientela del Partido Reformista del presidente Balaguer.

La utilización de los aparatos del Estado como instrumento directo de acumulación privada al servicio de esa nueva burguesía balaguerista se apoyó en dos pilares básicos: el crecimiento de las exportaciones, acelerado a principios de esta década por el notable aumento de los precios internacionales del azúcar —producto cuya elaboración y exportación el Estado dominicano es propietario en casi 70% de su volumen—, y el crecimiento del endeudamiento externo, especialmente a partir de 1972 (cf. el cuadro 2). Ambos factores, más el manejo de los instrumentos de la política económica, contribuyeron de manera decisiva a la expansión del mercado interno y crearon condiciones para la ampliación de

CUADRO 1

República Dominicana: PNB e inversión pública,  
1966 - 1976 (RD\$ millones de 1962)

Años	Inversión bruta interna	Inversión pública	PNB	Composición de la inversión pública (en %)	
				Construc- ciones	Maquinaria y equipo
1966	141.2	39.1	1001.1	71.0	29.0
1967	149.3	45.6	1035.0	76.5	23.5
1968	151.9	50.5	1040.4	82.2	17.8
1969	195.0	62.4	1167.1	73.5	26.5
1970	243.0	66.7	1286.6	91.9	8.1
1971	280.4	102.4	1407.2	90.2	9.8
1972	350.0	131.9	1581.4	91.0	9.0
1973	416.3	135.0	1772.1	89.9	10.1
1974	481.1	160.5	1894.1	77.6	22.4
1975	551.2	186.0	2001.7	76.3	23.7
1976	532.3	167.6	2128.7	78.1	21.9

Fuente: Banco Central de la República Dominicana



## CUADRO 2

República Dominicana: Evolución de algunos indicadores del sector externo, 1966-1977 (millones de dólares)

Años	comercio exterior			Deuda externa (1)			Inversión extranjera directa			Saldo en cuenta corriente de balanza de pagos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	Exportaciones	Importaciones	Saldos	Pública	Privada	Total	Amortizaciones	Ingresos	Egresos* (7+9):1		
1966	136.7	160.7	-24.0	154.9	3.2	158.1	21.8	32.7	19.4	30.1	- 74.9
1967	156.2	174.7	-18.5	188.6	4.8	193.4	37.0	16.6	20.7	36.9	- 66.2
1968	163.5	136.8	+26.3	216.3	4.9	220.9	60.3	23.0	20.0	49.1	- 75.2
1969	183.4	217.2	-33.8	248.1	13.0	261.1	113.1	40.9	24.4	74.9	- 81.9
1970	213.9	278.0	-64.1	272.5	18.9	291.4	121.2	71.6	27.4	69.5	-125.2
1971	240.7	309.7	-69.0	277.6	17.0	295.4	157.0	65.0	30.3	77.8	-124.1
1972	347.6	337.7	+ 9.9	322.1	263.0	584.6	263.9	68.6	48.4	89.8	- 47.6
1973	442.1	421.9	+20.2	335.9	279.0	608.7	249.5	34.5	79.7	74.5	- 97.9V
1974	636.8V	673.0V	-36.2	433.0	288.0	721.2	-----	53.6	94.9	-----	-242.4V
1975	893.8V	772.2V	+121.1	453.9	312.9	766.8	157.9	63.9	-----	-----	- 60.2V
1976	716.4V	763.6V	-47.2	533.7	425.3	959.0	339.3	60.0	-----	-----	-241.9V
1977	780.5V	847.6V	-67.1	609.5	465.0	1074.5	342.4	45.9	-----	-----	-264.3V

Notas: (1) Al 31 de diciembre de cada año.

(\*) Utilidades e intereses.

(V) Cifras sujetas a rectificación.

----- No hay información disponible.

Fuentes: Banco Central de la República Dominicana, y Oficina Nacional de Planificación.

la actividad general. Entre 1967 y 1976 el PBI creció, en precios constantes, con un ritmo anual promedio de casi 8%. Sin contar el sector azucarero, la producción industrial creció 3.5 veces entre 1964 y 1975, el empleo casi se duplicó, y el capital por hombre ocupado aumentó algo más de 75%.<sup>10</sup> Los incentivos definidos por el Estado actuaron con relativa eficacia y entre 1968 y 1974 se acogieron a ellos inversiones por más de RD\$170 millones, con más de 20,000 empleos. La expansión de la producción industrial y el "boom" de los precios del azúcar provocaron un incremento similar de la actividad comercial y financiera: entre 1966 y 1977 el circulante casi se cuadruplicó, y lo mismo ocurrió con los medios de pago y la emisión monetaria; las ventas al por mayor se duplicaron entre 1970 y 1974.<sup>11</sup> La inflación se aceleró, pero la manipulación de los instrumentos de política, y la desorganización de las clases populares, permitieron orientar hacia ellas lo fundamental de su impacto, y de hecho la convirtieron en un mecanismo adicional de acumulación. El nivel general de precios minoristas en la ciudad de Santo Domingo creció 111.8% entre 1966 y 1977, pero en el grupo de ingresos familiares de RD\$50 a 100 al mes, el aumento fue de 115.5%, y en el grupo de ingresos mensuales de RD\$101 a 200, de 118.1%; para el grupo de ingreso mensual familiar entre 401 y 600 pesos, los precios crecieron en cambio 81.1% (BCRD, bol., 1978).<sup>12</sup>

El aspecto más fácilmente visible de la etapa balaguerista fue sin duda el desarrollo de la nueva burguesía militar y civil. Sin embargo, los frutos de la expansión económica fueron apropiados en no menor medida —y sin duda, de manera más estable— por la clase dominante. Por un lado, a través de la acelerada ampliación y diversificación de sus actividades,<sup>13</sup> y por una cierta modernización tecnológica y organizativa de sus principales empresas. Por el otro, aprovechando las nuevas posibilidades de asociación subordinada definidas por la extensión y reformulación ya mencionadas de la penetración extranjera: construcciones, servicios forzosamente locales, administración de los nuevos intereses extranjeros, incursiones en el *agribusiness*, actividades productivas complementarias de la actividad extranjera, etc. A su turno esto ha hecho posible a algunas de estas fracciones, ofrecerse, en los últimos años, como una alternativa "moderna", desarrollista e incluso populista, a los grupos y fracciones más tradicionales de la gran propiedad fundiaria y comercial. Asimismo, su mayor envergadura económica, y su asociación subordinada al capital extranjero, les ha permitido mantenerse relativamente independientes, en lo que toca al proceso de acumulación en el que se apoyan, de los aparatos del Estado, y especialmente de la subalternización impuesta por la administración central y el poder ejecutivo, y asumir una fisonomía *técnica* e incluso *apolítica* frente a la necesaria politicidad

de la acumulación de la nueva burguesía balaguerista que circulaba alrededor de la presidencia de la república.

## II

La proyección de la creciente actividad económica y financiera sobre las pautas más aparentes y simbólicas de la vida burguesa cotidiana fue clara. Entre 1966 y 1974 el número de automóviles privados creció 211%, la cantidad de teléfonos aumentó casi 25% entre 1971 y 1975, y de 72,000 llamadas telefónicas internacionales se llegó en 1974 a más de 600,000. En sólo cinco meses de 1975 se importaron casi 13 millones de dólares (algo más de 4% del total de importaciones) en concepto de alfombras, tapices y terciopelos; crustáceos, moluscos y pescados; productos de perfumería; juguetes, juegos, artículos de recreo y de deporte; dulces y confituras (ONP, 1976: 29-29A). En solamente dos años —1976 y 1977— se inauguraron 18 salas cinematográficas en la ciudad de Santo Domingo, construídas con financiamiento público; en los últimos seis años la presidencia de la república encaró, entre otras cosas, la construcción de por lo menos cuatro museos, un parque zoológico, un jardín botánico, un teatro para música sinfónica, etc. Las nuevas avenidas, los centros comerciales, los hoteles internacionales, la activa vida nocturna, han convertido a la Ciudad Trujillo de principios de la década de 1960 en un borroso recuerdo.

Al mismo tiempo casi 72% de las familias de la ciudad de Santo Domingo contaba en 1969 con un ingreso mensual máximo de RD\$25 y concentraba 30% del ingreso familiar total; estudios más recientes señalan que en los últimos años la concentración aumentó más aún.<sup>14</sup> A principios de 1973 la misión del PREALC (Programa Regional de Empleo en América Latina y el Caribe) registró en la ciudad de Santo Domingo un 20% de desempleo, pero 60% de la población ocupada podía considerarse subempleada, de acuerdo a la misma fuente (ONP, 1973). Esta es posiblemente, junto a la reducidísima proporción de fuerza de trabajo sindicalizada —como máximo un 7% de los trabajadores—,<sup>15</sup> la causa principal de la vigencia de los bajísimos niveles salariales. Un promedio más que generoso para la industria manufacturera (sin computar al sector azucarero), la minería y, los servicios básicos, los fijaba en 1972 en 82¢ de dólar la hora, pero si se incluye al sector azucarero (que ocupa casi tres cuartas partes de la fuerza de trabajo y paga poco más de una cuarta parte del valor total de los salarios), el promedio baja a 45 magros centavos por hora,<sup>16</sup> —aproximadamente el nivel mínimo de las plantas de montaje, según se vio más arriba. La explotación relativa de la fuerza de trabajo<sup>17</sup> creció de una tasa media de 54% en 1964 a

139% en 1970 y casi 179% promedio en 1974; pero el atraso de la agricultura, el estancamiento de la producción de alimentos, la inflación y el congelamiento de las remuneraciones han provocado una prolongación del tiempo de trabajo necesario y un aumento de la explotación absoluta de la fuerza de trabajo. Puede estimarse que en 1975 una hora de trabajo industrial compraba en promedio 33% menos de una canasta mínima de alimentos básicos de consumo popular, que en 1972.<sup>18</sup>

Esta coexistencia de dos modalidades de explotación de la fuerza de trabajo—por incremento de la plusvalía relativa y al mismo tiempo por aumento absoluto de la plusvalía— indica la interpenetración contradictoria de distintas modalidades de acumulación de capital, de desigual desarrollo de las fuerzas productivas, y de diferentes matices de relaciones de producción. La definición y desarrollo de nuevos sectores de dinamismo económico ha permitido preservar prácticamente inalterada la estructura de tenencia de la tierra y producción en vastos sectores de la economía agropecuaria, y el poder de las fracciones de la clase dominante local que se asientan en él. De acuerdo al censo agropecuario de 1971 las fincas de menos de 5 hectáreas cada una (76.5% del total) representaban 13% de la tierra cultivable; las fincas de más de 100 hectáreas (1%) concentraban 44% de la superficie.<sup>19</sup> El índice de concentración de Gini creció de .827 en el censo de 1950 a .888 en el de 1960, y a .897 en el de 1971. La legislación de tierras sancionadas en 1972 a instancias del presidente Balaguer produjo un impacto económico y social marginal, y políticamente contradictorio. Más que salir al paso a las movilizaciones campesinas y a las ocupaciones de tierras, según era su finalidad expresa, las potenció, en la medida en que creó un espacio institucional de legitimidad a las presiones campesinas, que en principio pudieron articularse como demandas en favor de la efectiva vigencia de la nueva legalidad y del cumplimiento de la voluntad del presidente de la república. Al mismo tiempo, llevó a enfrentamientos entre fracciones terratenientes y el gobierno, y al esbozo de alternativas políticas a la derecha de éste —básicamente, el Movimiento de Salvación Nacional. Por último, la lenta y desgana aplicación de los programas de asentamientos campesinos<sup>20</sup> profundizó el enfrentamiento de éstos con el gobierno, y la oposición y la represión directa a que recurrieron los terratenientes —frecuentemente con el auxilio de algunas fracciones de las fuerzas armadas— exacerbaron los antagonismos de clase y posibilitaron su expresión como contradicciones políticas.

El profundo atraso del sector agrícola dominicano —la reducida tecnificación, el estancamiento de la producción, los rendimientos muy bajos, etc.— reduce las funciones económicas de las fracciones terratenientes de la clase

dominante. Este atraso, aunque favorece la expansión del capital comercial en el sector de importación, cuestiona la legitimidad de la dominación política de aquellas fracciones, especialmente frente a los grupos más estrechamente ligados a las nuevas actividades y a la producción industrial para el mercado interno. La ausencia de inversiones tecnológicas en el sector azucarero de capital nacional —público y privado— coloca los costos de producción muy por encima de los precios internacionales, salvo en momentos de alzas excepcionales de las cotizaciones. La explotación de la tierra se lleva a cabo básicamente en función de una adaptación de las superficies cultivadas a las fluctuaciones del mercado internacional. Este estilo de producción tiene vigencia tanto en las plantaciones del sector privado (la casa Vicini) como en las del Consejo Estatal del Azúcar —que en la última década fue asignado asimismo a la condición de mecanismo de expansión de la nueva burguesía balaguerista, a través de la distribución de tierras fiscales y la creación de colonias de caña a los favoritos del régimen, el usufructo de las oportunidades de información y de los recursos disponibles mediante la ocupación de sus cargos directivos.<sup>21</sup> En uno y otro caso, la reducción de los costos de la fuerza de trabajo parece ser el único medio disponible para alcanzar una mínima rentabilidad, al mismo tiempo que la posibilidad de contar con una fuerza de trabajo abundante y muy barata se presenta como una alternativa aparentemente plausible a la realización de inversiones orientadas a elevar los rendimientos agrícolas y la productividad de la etapa industrial. El recurso a los picadores de caña haitianos parece seguir siendo el soporte principal de la economía azucarera. La compulsión extraeconómica que se ejerce sobre esta mano de obra para forzarla a aceptar cualesquiera condiciones de trabajo y de remuneración, señala la intervención de los aparatos de Estado en la configuración de las relaciones de producción —política de fronteras, control policíaco de los trabajadores y “recolectas” de picadores (Corten et al., 1973). La conveniencia del empleo de estos trabajadores parece haber sido apreciada por otras fracciones de la burguesía agrícola; en años recientes se ha detectado una significativa participación de fuerza de trabajo haitiana en la recolección de café y de cacao, y en la cosecha de arroz.

Sin embargo, estos remedios son parciales y de corto plazo, y no logran impedir que la tasa de explotación *relativa* de la fuerza de trabajo sea todavía baja como promedio, según se ha visto, y que imponga en consecuencia un ritmo lento a la expansión capitalista. Dicha tasa está determinada en primer lugar por el valor de cambio de la fuerza de trabajo, y éste a su turno depende de las condiciones sociales de organización de la producción en la agricultura; el atraso de ésta se traduce, también se ha dicho, en un encarecimiento de la producción respectiva y obliga a alargar el tiempo de trabajo necesario para la reproducción

de la fuerza de trabajo, reduciendo en consecuencia el tiempo de trabajo excedente y limitando la tasa de plusvalía que se extrae. Al mismo tiempo, el hecho de que el tiempo de trabajo que se encuentra efectivamente incorporado a los bienes alimenticios populares sea mayor que el tiempo de trabajo socialmente necesario para la generación, en la industria manufacturera, de las respectivas mercancías, conduce a un desfase negativo entre el precio pagado por la fuerza de trabajo y su valor de cambio, y por lo tanto a una sobreexplotación de la fuerza de trabajo (Corten, 1974). Ahora bien: la sobreexplotación de la fuerza de trabajo tiene un límite, que está dado no solamente por la resistencia física del trabajador —operacionalmente, por la duración efectiva de la jornada de trabajo—, sino asimismo por la calidad de las mercancías que se producen—requerimientos técnicos, rendimiento permanente, precisión. El acelerado desgaste físico del trabajador —el "derroche de fuerza de trabajo" señalado por O. Lange en las huellas de Marx (Lange, 1968: 74 y ss), que se expresa en la frecuencia de los accidentes de trabajo, la baja esperanza de vida de la población, la desnutrición y el raquitismo en la casi totalidad de la población infantil y juvenil de las clases populares, puede ser compensado con una alta tasa de reposición de la fuerza de trabajo que se hace viable merced a los elevados índices de desempleo y subempleo, a la reducida tasa de sindicalización, a la manipulación patronal y estatal de los sindicatos paralelos, y a la coacción física y legal ejercida por los aparatos de Estado. Pero parece evidente que este recurso existe básicamente en los sectores de la producción donde las calificaciones técnicas de la mano de obra carecen de relevancia; al contrario, cuando de lo que se trata es de las nuevas actividades industriales y de los servicios básicos, que demandan una fuerza de trabajo relativamente calificada, la reposición de la mano de obra surge como un verdadero problema. Son precisamente estos sectores, de tecnología relativamente avanzada y mayores niveles de productividad, hacia los que se ha proyectado preferentemente la diversificación empresarial de las fracciones más dinámicas de la clase dominante y de la inversión extranjera, los que llevan a cabo una acumulación de capital con base en la explotación de plusvalía relativa, y los que más agudamente experimentan los frenos que emergen del atraso agrícola. Además de su intento de salirle al frente a las movilizaciones campesinas, las leyes agrarias de 1972 pueden ser asimismo interpretadas como un intento del Estado de procesar las demandas de los grupos industriales de la clase dominante, y del capital extranjero, de reducir el valor de la fuerza de trabajo a través del aumento de la producción de alimentos y de la reducción consiguiente de su precio en términos relativos.

En el origen del creciente endeudamiento externo de la economía dominicana parece encontrarse, más que la política de inversiones del sector

público, la incapacidad de la economía azucarera y del nuevo sector de enclave para brindar, vía exportaciones, el financiamiento demandado por el desarrollo del mercado interno, y la elevada propensión a las importaciones de la clase dominante y de los grupos de nueva burguesía balaguerista. Es cierto que las dimensiones relativamente reducidas del sistema económico dominicano, y el apoyo a toda prueba de sucesivos gobiernos norteamericanos, disminuyeron los desajustes que el endeudamiento externo ha podido provocar en el proceso de acumulación, sobre todo en lo que concierne a los sectores más estratégicos para la expansión de las firmas transnacionales; sin perjuicio de algunas limitaciones, el refinanciamiento de la deuda externa, las diversas formas de la asistencia exterior, y similares, parecen estar siempre disponibles. Pero la gravitación político-institucional de las fracciones importadoras de la burguesía —sobre todo en materia de política cambiaria—, el elevado coeficiente de importaciones de la industria local que produce para el mercado interno, y las características de la demanda de los principales productos de exportación, dificultan la adopción de medidas "ortodoxas" al estilo del Fondo Monetario Internacional en el tratamiento del sector externo (devaluación de la moneda nacional, medidas arancelarias) y reducen en todo caso su eficacia.

Finalmente, el peso político-institucional de las corporaciones transnacionales que actúan en el enclave minero ha inhibido la capacidad de maniobra del Estado en momentos en que casi todos los productores del Tercer Mundo renegociaron favorablemente los contratos de explotación; ha colocado a las firmas en posición privilegiada en el mercado financiero local, y les ha otorgado el aval del Estado dominicano para el endeudamiento externo de las ramas locales, y permite que entre dos tercios y tres cuartos del valor de las exportaciones del sector queden fuera del circuito económico local.

Como ya se dijo, la incorporación de camadas de la pequeña burguesía urbana a la expansión económica de la última década se apoyó fundamentalmente en la actividad del sector público, a través de los nuevos carriles de acumulación definidos o profundizados por él. Económicamente, por el aprovechamiento de las condiciones generales creadas por el incremento del gasto público y el alza de los precios internacionales del azúcar, y para una minoría, por el usufructo de procedimientos y mecanismos como los ya señalados. Políticamente, por el acceso a diversos niveles de la administración pública de un número creciente de sus representantes políticos y corporativos y por la posibilidad consiguiente de manejar directamente los mecanismos de enriquecimiento, las fuentes de información, etc. Aceptadas que fueran las reglas básicas del régimen —la intangibilidad de los intereses extranjeros y de la clase dominante local, y la reelección aparentemente indefinida del presidente

Balaguer—, no existieron demandas particulares que el Estado no estuviera dispuesto a satisfacer: riqueza, honores, prestigio, viajes, relaciones, fama ...

Esto hizo posible una progresiva fractura del frente de fuerzas sociales de 1965, y especialmente una lenta pero sostenida separación de la pequeña burguesía respecto de las clases populares. Las contradicciones de esa pequeña burguesía con la dominación externa y las clases dominantes locales pasaron a ser vividas, por amplias fracciones de ella, como contradicciones particulares, distintas y separadas de los procesos sociales generales, colectivos. La posibilidad de encaramarse a la dinámica de las nuevas relaciones periféricas y al proceso de acumulación promovido generosamente por los aparatos del Estado, el tránsito de algunas fracciones hacia una configuración propiamente burguesa, impulsaron una correlativa diferenciación de intereses y de orientaciones político-ideológicas respecto a las clases populares que en la guerra de abril constituyeron su aliado y su base. Fue posible por lo tanto que grupos y partidos políticos que en la inmediata postguerra de abril, dirigían sus interpelaciones ideológicas hacia las clases populares, presentando en dichas interpelaciones un enfrentamiento global con la dominación imperialista y sus aliados locales, relajaran sus compromisos y vinculaciones con las masas y morigeraran sus planteamientos. Asimismo, desviar de alguna manera las presiones de la pequeña burguesía sobre la clase dominante y el capital extranjero, ampliar el apoyo que podía reclamar el poder ejecutivo, y reorientar en modo a veces profundo las pautas programáticas de los partidos que de alguna manera exhibieron la representación de estas fracciones. La larga duración del régimen, la evidencia del respaldo inmovible de las fuerzas armadas y de los sucesivos gobiernos norteamericanos, y la relativa difusión entre los sectores medios de algunos de los frutos del crecimiento económico de la última década, favorecieron la adopción de programas *pragmáticos* y *realistas* que los aproximaron a las pautas básicas de la política del gobierno y redujeron el nivel de las demandas de reformas, circunscribiéndolas a planteos jurídicos y moralizantes que soslayaban un cuestionamiento efectivo de la dominación imperialista y de la configuración estructural de la sociedad que la articula. Las fisuras internas en la oposición burguesa y pequeño burguesa se resolvían frecuentemente en el ingreso más o menos formal al gobierno o al partido oficialista de una de las fracciones o en la concesión de prebendas a sus dirigentes (La Noticia, 22 set. 1978); las críticas al gobierno —críticas que se preocupaban siempre de eximir de responsabilidad al presidente de la república— y la ostentación de una clientela electoral fueron a menudo el prolegómeno de la incorporación al oficialismo para solucionar *técnicamente, desde adentro*, los desajustes denunciados, y mimetizarse en los aparatos del Estado y en la utilización de sus



oportunidades de realización individual. La política como estrategia de poder tendió a diluirse en presiones particulares en favor de intereses inmediatos y singulares; las intrigas de palacio desplazaban a la política de partidos.

### III

El desarrollo capitalista experimentado por la República Dominicana en la última década impulsó una creciente diferenciación en las clases dominantes, y la generación de contradicciones entre sus diversas fracciones en torno al proceso de acumulación del capital. Sin pretender agotar el tema, se señalan a continuación las que parecen más relevantes desde la óptica de este artículo.

En primer lugar, una contradicción en torno a la modalidad predominante de explotación de la fuerza de trabajo. En la sección II se mostró la articulación que existe en la economía dominicana de dos modalidades básicas de explotación laboral: por aumento absoluto de la extracción de plusvalía, y por su aumento relativo. Sólo la segunda puede servir de base a una expansión sostenida de las fuerzas productivas del capitalismo, en tanto que la primera erige crecientes frenos a la misma, y de hecho señala la articulación subordinada de modos de producción precapitalistas en la formación social dominicana. La explotación relativa de la fuerza de trabajo es todavía hoy de una tasa relativamente baja en la República Dominicana, según ya se ha visto, no obstante su aumento considerablemente rápido en los últimos años. Esta es la plataforma sobre la que toman cuerpo las renovadas demandas y planteamientos de las fracciones industriales de la burguesía dominicana en favor de la modernización de la economía agropecuaria del país: algún tipo de reforma agraria, aumento de los rendimientos en la producción de alimentos, desarrollo del *agribusiness*, etc., que forzaron al presidente Balaguer a promulgar las leyes agrarias de 1972, y que generaron contradicciones sectoriales de creciente explicitación con las fracciones terratenientes más atrasadas, con las fracciones de la burguesía comercial que encuentran en la explotación del campesinado una fuente importante de acumulación, y con los grupos de importadores de productos agrícolas.

En segundo lugar, contradicciones entre fracciones de la burguesía local y el capital extranjero. La existencia de estas contradicciones no niega la subordinación estructural de la burguesía dominicana respecto de la dominación extranjera, pero la dinamiza. Sus expresiones oscilan desde un nivel mínimo, como formas de competencia entre capitalistas locales y extranjeros por el control de áreas circunscritas del mercado local, hasta tentativas más o menos firmes de reformular y mejorar las modalidades de asociación subordinada al exterior: individualmente, o colectivamente a través del Estado —presiones para

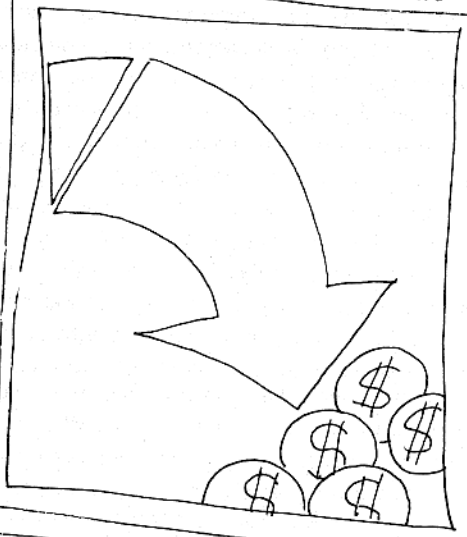
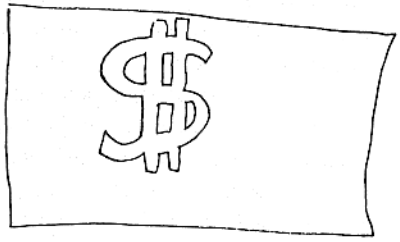
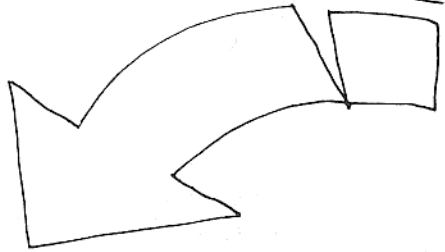
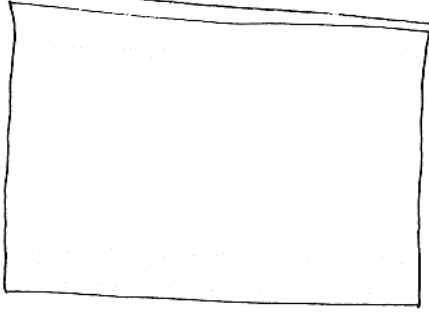
renegociar los contratos con las corporaciones mineras, para modificar el sistema de incentivos al capital extranjero, y otras. No es necesario enfatizar el alcance reducido de estas contradicciones, pero contradicciones de alcance reducido no significa inexistencia de contradicciones.

En tercer lugar, contradicciones entre las fracciones más consolidadas de la burguesía, y las de la nueva burguesía balaguerista desgajadas recientemente de la pequeña burguesía gracias a los mecanismos referidos en la sección anterior. La posición privilegiada de estas nuevas fracciones, derivada menos de las "fuerzas del mercado" que de su privilegiada manipulación de ciertos aparatos del Estado —el poder militar, las instituciones crediticias, el favor palaciego, la apropiación de bienes públicos...—, las ha dotado de un empuje y una agresividad económicas que en los últimos años planteó desafíos y desplazamientos segmentarios pero reales de la posición ejercida en el mercado local por los grupos más antiguos —ya que no necesariamente más tradicionales— de la burguesía local.

En otro nivel, estas contradicciones se expresan como enfrentamientos y antagonismos entre la expansión del desarrollo capitalista y el régimen político-jurídico e ideológico del balaguerismo. Si la *privatización* de los aparatos de Estado y su estrecha adherencia a los relieves del mapa social sirvieron para la formación de considerables fortunas personales y para la capitalización y el ascenso político-militar de sus beneficiarios, chocó de manera cada vez más frecuente, en este proceso, con las exigencias *impersonales* y *abstractas* de la acumulación capitalista, que demandan y generan una diferenciación clara entre la esfera privada y la esfera pública, la presencia de un Estado también impersonal y abstracto y la vigencia de un *Derecho igual*; Estado y Derecho que son producto de aquella acumulación que se halla en contradicción con las formas políticas particularistas de un régimen social que lucha todavía por la supervivencia (Vilas, 1974; Tigar y Levy, 1977). El interés general de la clase capitalista —metropolitana y periférica— aparecía subordinado frecuentemente, en el régimen del doctor Balaguer, a los intereses inmediatos y particulares de grupos, empresas e individuos. El costo de la privatización de los aparatos del Estado fluctuaba desde una alarmante dilapidación de recursos —en una economía que debió endeudarse pesadamente para conseguir capitales de inversión—<sup>22</sup> hasta el desaprovechamiento de las escasas y fugaces coyunturas propicias que ofrece el mercado internacional. Como se dijo más arriba, la corrupción, el peculado, etc., pueden funcionar, en principio, como mecanismos de acumulación. Pero para una gran parte de sus usufructuarios fue meramente una fuente de enriquecimiento y de incremento de su propensión a las importaciones, mientras que la minoría que le dio una finalidad productiva

alcanzó posiciones de privilegio en el mercado interno respecto de las fracciones más antiguas de la clase dominante, desplazándolas incluso de algunos de sus dominios. A su turno el particularismo de los aparatos del Estado entorpeció una más acelerada expansión de la actividad económica; la radicación de una nueva inversión, la concesión de un crédito o de un permiso de importación, la aprobación de un plan de financiamiento, debían pasar por largas y complicadas tramitaciones de un enjambre de funcionarios que hallaban en las variadas formas de la corrupción menuda un complemento insustituible para sus magros sueldos, y en la corrupción mayor su lanzamiento al mundo de los negocios o del consumo ostensible. En todos los casos una porción medianamente significativa del crédito, la inversión, etc. quedaba en las manos de quienes se apropiaban de los aparatos, o se derivaban hacia el partido de gobierno y/o sus agencias de beneficencia. La ausencia de pautas generales y abstractas en el tratamiento de las cuestiones cotidianas de la empresa capitalista, la falta de un ordenamiento jurídico positivo moderno y más o menos representativo del núcleo dinámico de la presente etapa de acumulación, la reducida eficacia de los órganos judiciales como instancia legítima de resolución de los conflictos, la centralización final de todas las decisiones de importancia en la cúspide del poder ejecutivo —y la ausencia de un criterio objetivo y estable de qué era una *cuestión de importancia*—, chocaron con intensidad creciente contra las exigencias del crecimiento capitalista y preservaron, en esta nueva etapa de desenvolvimiento, las viejas prácticas administrativas e institucionales de una economía en retroceso ante los requerimientos de las corporaciones transnacionales y del capitalismo industrial. La disgregación de los aparatos represivos en el seno de la sociedad —la militarización de las prácticas sociales, la libre circulación de séquitos y guardias personales, etc.— atentaba contra la centralización y verticalidad de los aparatos y del poder del Estado y, de hecho, contra la imagen misma del Estado capitalista en su acepción weberiana del monopolio de la violencia legítima. Estado débil en consecuencia, que no alcanza a diferenciarse plenamente de las clases dominantes, ni a erigirse en instancia relativamente autónoma en la que se procesan las contradicciones sociales y se tranzan los intereses en conflicto. El Estado balaguerista fue, en verdad, una expresión “rezagada” de la sociedad campesina y de plantación en momentos en que el peso principal y el dinamismo de las relaciones económicas pasaban ya, fundamentalmente, al margen de ella.

Las contradicciones en el seno de la clase dominante se desarrollaron en el marco más amplio de la dialéctica entre clase dominante y clases dominadas. El régimen trató de obtener legitimidad frente a la clase dominante, por encima de sus contradicciones internas, promoviendo sus bases materiales y acotando,



reprimiendo, aniquilando las expresiones de oposición y de lucha de las fuerzas populares. En cuanto a lo primero, ya se ha visto cómo la propia dinámica del proceso condujo a la generación de intereses diferenciados y de contradicciones dentro de las fuerzas dominantes, y entre éstas —o algunas de sus fracciones— y las formas políticas asumidas por dicho proceso. En cuanto a lo segundo, se señaló en la primera sección que él constituyó el capítulo inicial y uno de los rasgos predominantes de la etapa posterior a 1965-66, pero también aquí la dialéctica global de la sociedad impuso algunas limitaciones. Primero, por las orientaciones distributivistas y populistas de algunas fracciones "modernas" de la burguesía industrial dominicana. Esas fracciones sí postulan una estrategia de acumulación que contempla como uno de sus componentes decisivos la ampliación del consumo y del mercado interno, la elevación del nivel de vida de algunas fracciones de las clases populares, y que por lo tanto implican una distensión del componente represivo del régimen, y el reconocimiento de una cierta ampliación de las formas "legítimas" de participación popular.<sup>23</sup> Como observó hace algún tiempo Weffort, el populismo es una forma de manipular a las masas, pero es también una forma que tienen las masas de expresar su descontento (Weffort, 1973). Aparte de las obvias diferencias y distancias —y por supuesto, complementaciones— entre manipulación y represión. Estas orientaciones de dichas fracciones de la clase dominante se expresan asimismo como apoyo a la vigencia del principio de representatividad electoral, y se articulan en un discurso ideológico en el que sus limitadas contradicciones con la presencia extranjera en la economía son presentadas, con no poco éxito, como testimonio de su nacionalismo. En segundo lugar, las presiones de Washington —desde antes incluso del acceso del presidente Carter a la Casa Blanca— en favor del mantenimiento de los procedimientos electorales, mantenimiento que le permitía ostentar a la faz del continente el espectáculo poco frecuente de un aliado incondicional de la política exterior norteamericana, defensor escrupuloso de la "libre empresa", y que por añadidura convocaba a elecciones cada cuatro años. A su turno, unas y otras limitaciones eran producto de la gravitación de la capacidad de asociación y de lucha de las clases populares, que independientemente de sus derrotas inmediatas crearon el espacio político para una relativa vigencia de la libertad de información, para la formulación de críticas y denuncias y la propagandización de posiciones y de alternativas, y crearon forzosos límites al despliegue represivo del Estado, limitaciones que de alguna manera permitieron una lenta, trabajosa y desigual, pero efectiva, recuperación de algunas organizaciones de clase de las fuerzas populares —sindicatos, ligas campesinas, algunas expresiones políticas— después de cada golpe. En desigual medida estos elementos —junto a otros más— contribuyeron a mantener la

vigencia del principio de representatividad electoral que forzaba al gobierno del doctor Balaguer a someterse cada cuatro años a la formalidad —en el nivel mínimo— o al desafío —en el nivel máximo— de una confrontación de la que en principio sale victorioso quien tiene más votos. Es sabido que reiteradamente se recurrió a procedimientos encaminados a reducir al mínimo el margen de riesgo, pero aquellos mismos elementos que forzaban la vigencia del principio democrático-electoral imponían limitaciones a las posibilidades manipuladoras del gobierno.

Las tensiones y conflictos sociales, y particularmente entre las fracciones dominantes, hallaron expresión bastante clara en la esfera política, especialmente en el PRD, la fuerza política mayoritaria. En las elecciones de 1966, celebradas bajo la supervisión de las tropas invasoras, el partido fue derrotado por el doctor Balaguer, obviamente el candidato norteamericano y de los grupos dominantes, pero también con una presencia significativa de votos campesinos. En las siguientes elecciones presidenciales, en 1970, el PRD se abstuvo por falta de garantías suficientes y el Partido Reformista (PR) de Balaguer sólo tuvo que enfrentar la oposición simbólica de algunas denominaciones menores. Pero a partir de esa época el PRD experimentó una divergencia ideológica interna de creciente profundidad. De un lado, la fracción encabezada por el profesor Juan Bosch, que trató de imprimir al partido una ideología nacionalista revolucionaria —la tesis de la "dictadura con respaldo popular. Por el otro lado, las fracciones que controlaban efectivamente el aparato partidario y los elementos de la burguesía presentes en el PRD; su rechazo a las posiciones sustentadas por la fracción "boschista" —que tornaban ilusorias sus aspiraciones de acceso al gobierno en el contexto del régimen producto de la invasión y del triunfo de Balaguer— constituyó el terreno fértil para las aproximaciones efectuadas por la diplomacia norteamericana, claramente orientadas a profundizar las divisiones internas y a terminar de convencer a la derecha del partido de las virtudes de la democracia representativa y del sentido *común* (Wheaton, 1978:39-41). El proceso culminaría a fines de 1973 con la salida de la fracción de Bosch y la creación subsiguiente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Las masas, empero, no siguieron al veterano líder, sino que permanecieron en el PRD encolumnadas tras la figura del doctor Peña Gómez, su principal figura política, colocado ahora, tras la salida del grupo de Bosch, en el ala izquierda del PRD. En las elecciones presidenciales de 1974 la alianza opositora encabezada por el PRD fracasó y se optó nuevamente por la abstención electoral; el PR tuvo que "enfrentar" únicamente al minúsculo Partido Demócrata Popular del ex contraalmirante Lajara Burgos. El rito de la competencia se satisfizo, pero los cómputos de la jornada —por primera vez se aplicó un sistema de registro

electoral— permitieron apreciar, más allá de las manipulaciones gubernamentales, la avalancha de abstenciones frente a los votos obtenidos por el doctor Balaguer.

Durante la última presidencia de Balaguer (1974-1978) se fortaleció en el PRD la hegemonía de las fracciones más dinámicas y democráticas de la burguesía local y de los grupos superiores de la pequeña burguesía; el partido asumió la fisonomía familiar en América Latina de una organización conducida ideológicamente por fracciones de las clases dominantes y la pequeña burguesía, con una base de masas altamente movilizable dentro del marco de aquella conducción. El PRD se afilió a la Internacional Socialista formalizando su definición socialdemócrata y asegurándose la solidaridad de las organizaciones hermanas y de la entidad internacional —y de los gobiernos ubicados ideológicamente en la socialdemocracia. Por todos los medios a su alcance trató de desprenderse de una imagen revolucionaria y de divorciarse del recuerdo de su participación decisiva en la Guerra de Abril; al contrario, el partido se presentó como una alternativa a la revolución social y la violencia desbordada de las masas.<sup>24</sup>

Parece claro, sin embargo, que las buenas relaciones de algunos sectores de la diplomacia y el gobierno norteamericanos con el PRD no tuvieron como contrapartida el abandono de su tradicional apoyo al doctor Balaguer. En primer lugar, por la fidelidad a toda prueba demostrada durante más de una década por el anciano gobernante; en segundo lugar, porque entre los analistas de la embajada norteamericana y del Departamento de Estado parece haber prevalecido la opinión de que Balaguer obtendría una nueva reelección. Sin dudas, más de un aspecto del régimen dominicano contradecía la versión carteriana de lo que debe ser una plena vigencia de los derechos humanos, pero la reunión de presidentes en setiembre de 1977 con motivo de la firma de los tratados del canal de Panamá, permitió ver a las claras el respaldo de la administración demócrata a Balaguer. El apoyo norteamericano al PRD parece haber sido, pues, el apoyo a una válvula de seguridad; en todo caso es evidente que Washington jugó en todo momento a ganador. La situación del conjunto de las clases dominantes —vale decir, dejando de lado a las fracciones políticamente identificadas con el PRD, o mejor, que contribuían a dar al PRD su identidad— no fue del todo diferente. Las contradicciones con el régimen de Balaguer eran, ya se ha dicho, segmentarias, particulares y desigualmente abarcadoras de sus distintas fracciones. Incluso en las más modernas, su aproximación al PRD no podía desprenderse totalmente de una marcada ambigüedad, atraídas como estaban por la posibilidad que éste ofrecía, o insinuaba, de impulsar a través de sus fracciones de derecha una mayor racionalidad al proceso capitalista de desarrollo, al par que asumía como propio el cuasi nacionalismo de aquellos

sectores del empresariado; pero al mismo tiempo recelosas de la base masiva y fácilmente movilizable del partido, frente a la cual la capacidad de manipulación y freno del aparato parece siempre débil y problemática. Por último, si la clase dominante podía articular en las fracciones de la derecha del partido sus propias orientaciones e intereses, no es menos cierto que el componente masivo del PRD permitió que el partido avanzara considerablemente en la aglutinación, en la conjuntura del proceso electoral, de las fuerzas populares. Estas veían en el triunfo del PRD la posibilidad de satisfacer algunas de sus más reiteradas y urgentes reivindicaciones —vigencia de las libertades democráticas, de los derechos laborales, reivindicaciones socioeconómicas, etc.—, y eventualmente de ampliar el espacio de su acción política. Más aun: desde que el desplazamiento de Balaguer era, obviamente, una cuestión de votos, la lógica misma del proceso electoral condujo a un avance de la presencia —aunque no de la movilización ni menos del nivel de organización— del elemento de masas en la dinámica del partido. Puesto que no podía levantarse, como reivindicación contra el régimen, la baja tasa de explotación de la fuerza de trabajo, no quedaron otras banderas que la lucha por la plena vigencia de la democracia, el control nacional de los recursos naturales, la libertad de los presos políticos, la legalización de la actividad política de las denominaciones de izquierda, la lucha contra la corrupción, etc. En el discurso ideológico del proceso electoral pasaron a predominar, por lo tanto, los elementos del discurso ideológico de las fuerzas populares, por más que articulados en un contexto que se resolvía, en definitiva, en una reformulación del esquema de dominación social dentro de parámetros definidos por las clases dominantes, la Casa Blanca, y las corporaciones transnacionales.

En consecuencia, la firme alineación del gobierno de Estados Unidos y de las clases dominantes dominicanas —incluso de sus fracciones menos sofisticadas— tras el PRD, exigiendo de Balaguer y de las fuerzas armadas el respeto de los resultados electorales, no debería ser aislada de la conjuntura específica en que se planteó, ni reducida meramente a un ejemplo de adhesión a las formas legales y constitucionales de la democracia representativa. La interrupción militar del escrutinio en la madrugada del 17 de mayo ante la evidencia de la avalancha de votos en favor del PRD amenazó con desencadenar una crisis que bien pudo haber llevado a un alzamiento popular que desbordara los diques partidarios y a acontecimientos como los de 1965.<sup>25</sup> Ante esa eventualidad la Casa Blanca, las transnacionales y las clases dominantes intervinieron decididamente y de consuno para alejar el espectro de una catástrofe —pocas veces más apropiada que ésta, la denominación gramsciana de *crisis catastrófica*— a través del respeto de la voluntad popular; las presiones de la Internacional Socialista y



de varios gobiernos de la región apuntaron en el mismo sentido y además diluyeron un poco la imagen de la decisiva intervención norteamericana (Szulc, 1978:13-16). Los meses que transcurrieron entre las elecciones y la juramentación de las nuevas autoridades —el cruce nocturno de un abismo haciendo equilibrio sobre una cuerda floja— presenciaron tanto el avance del PRD hacia el gobierno cuanto, parece claro, los acuerdos y compromisos que pavimentaron dicho avance. En lo que toca a los grupos balagueristas, la seguridad de una política de "borrón y cuenta nueva" —blanqueo de capitales, no enjuiciamiento de los responsables de peculado, etc.; en lo que se refiere al conjunto de las clases dominantes, una estrategia gradualista al servicio de una política de la que estarían ausentes las medidas extremas o los cortes tajantes.

Pero al mismo tiempo, en la medida en que se llegó a la etapa recién abierta por un acto de masas —a su turno, producto y episodio de duras y prolongadas luchas populares y democráticas—, se creó un espacio para la intensificación de las presiones sociales y políticas de las clases populares, articuladas ahora en el contexto de una nueva legalidad. La explosión cotidiana de numerosos conflictos laborales en torno a cuestiones de sindicalización, remuneraciones, estabilidad laboral, democratización del proceso de trabajo, etc., es apenas un indicio del nuevo clima político que se vive en el país. La dialéctica balaguerismo/antibalaguerismo, que presidió ideológicamente los términos del conflicto político en la etapa precedente, es desplazada ahora por la dialéctica, cada vez más manifiesta, clases dominantes/clases dominadas,<sup>26</sup> dialéctica que captura asimismo, progresivamente, la dinámica interna del partido gobernante.

En estas condiciones, enmarcadas a su turno en la desaceleración del crecimiento económico y en profundos desbarajustes financieros y administrativos heredados del período balaguerista, con pesadas cargas de la deuda externa, las aspiraciones del PRD de presentarse a un mismo tiempo, frente a las masas como un freno o limitación de los intereses de las clases dominantes y del imperialismo, que de otro modo arrasarían con las libertades y derechos democráticos y con el exiguo margen de auto-determinación nacional, y frente a las clases dominantes como el encauzamiento y morigeración de las presiones de las masas y como alternativa a un desbordamiento violento, resultan utópicas y recíprocamente excluyentes, por más que sean coherentes con las ensoñaciones ideológicas de la pequeña burguesía, que se piensa ajena y por encima de las contradicciones sociales.

El proyecto de modernización y reformulación del capitalismo periférico que parece configurar el núcleo de la nueva etapa alberga, pues —no podría ser de otra manera— contradicciones y tendencias disruptivas. En lo que toca a las

fracciones más primitivas de las clases dominantes, cualquier tentativa más o menos decidida de introducir mayor eficiencia y racionalidad en el sistema económico plantea una aceleración de las tendencias históricas a su desplazamiento, y huele por tanto a comunismo. En lo que respecta a las corporaciones transnacionales, el reducido alcance del "nacionalismo" del proyecto —tendiente en último análisis a incrementar la participación fiscal en el producido de las exportaciones, a mejorar situaciones específicas de asociación subordinada—, tiene como limitación no sólo el carácter estructuralmente dependiente de la sociedad dominicana sino además la naturaleza férreamente excluyente y concentradora del sector de enclave, y la apropiación de los aparatos de Estado por las corporaciones. En relación con la burguesía importadora, en la medida en que el saneamiento del sector externo y un impulso efectivo al desarrollo industrial orientado a la expansión del mercado interno, plantean la imposición de regulaciones y controles sobre el sector y la reducción junto con sus ganancias, de su gravitación en el bloque de fuerzas dominantes. En lo referente a la nueva burguesía balaguerista, los planteamientos moralizantes respecto del sector público y de las prácticas económicas atentan contra los mecanismos y procedimientos de acumulación que hicieron posible su acceso a la burguesía, o por lo menos su enriquecimiento. En cuanto al conjunto de las clases dominantes, una vigencia incluso pálida de la socialdemocracia —en todo caso, en su versión populista local—, exige la existencia de organizaciones sindicales fuertes, de instancias "legítimas" de transacción de intereses —por ejemplo, un sistema de seguridad social, creación de tribunales del trabajo, etc.—, una efectiva mejora de las condiciones de vida de las masas que, por un lado, institucionalizan la presencia política de las clases populares, y por el otro, deben ser alimentados en parte con una reducción del excedente apropiado por las fracciones dominantes. En lo que toca a las clases populares, el espacio de reformas y de transacción que las clases dominantes —incluso sus sectores más modernizantes— están dispuestas a reconocer queda por debajo del nivel adquirido por sus demandas reivindicativas y político-ideológicas; nivel que se ha potenciado en el ámbito sindical, y en general urbano, a partir del 16 de agosto, en la medida en que se articulan como exigencias de cumplimiento de coincidencias previas y de vigencia real de la legalidad. Al mismo tiempo las metas económicas del proyecto de desarrollo —aumento del empleo, expansión del consumo, y similares— definen condiciones para el fortalecimiento de la organización sindical y la elevación de su eficacia reivindicativa. Por último, la nueva legalidad favorece la actividad pública de las organizaciones populares, de las denominaciones políticas que sostienen posiciones revolucionarias y en general de izquierda, y un tendencial acercamiento recíproco que alarma ya a algunas fracciones dominan-

tes y de la pequeña burguesía con el fantasma de la subversión.

La precedente es apenas una escueta enunciación de las contradicciones que dinamizan a la presente etapa —y que, de hecho, la definen como una etapa distinta. Ni su desencadenamiento es simultáneo, ni su alcance similar, *ni su simple enunciación debería implicar que el proyecto que se trata de articular carece de todo tipo de vitalidad*. Sin embargo sólo los desarrollos ulteriores del proceso permitirán apreciar esta última, y determinar si el pueblo dominicano podrá evadirse de la dialéctica que ha aprisionado a experiencias equivalentes en otras sociedades de la región.

## NOTAS

1. Este texto recoge y reelabora algunos temas de una ponencia presentada en el III Congreso Centoramericano de Sociología (Tegucigalpa, abril 1978).
2. Entre 1961 y 1964 el valor de las importaciones creció a un ritmo promedio anual de 38.7%. Véase República Dominicana, Oficina Nacional de Estadística, *Comercio Exterior de la República Dominicana*, varios años.
2. Entre 1966 y 1970 fueron muertos por causas políticas o desaparecieron, por la misma razón, no menos de 650 personas, casi 300 de éstas en 1970. Véase José Alcántara Alamzar, *Análisis de la violencia en Santo Domingo*, dactilografiado, 1971.
4. El hecho más resonante fue el incidente del Hotel Matur en la ciudad de Santiago en la segunda mitad de 1965.
5. Conocida es la participación del Central Romana Corp. —propietaria del central azucarero homónimo— en la destrucción del combativo Sindicato Unido del Central Romana (1966), y la de la Falconbridge Dominicana en la represión de las huelgas mineras de 1970.
6. Elaboración de las cifras publicadas anualmente por la Dirección del Presupuesto, *Ejecución del presupuesto*. Un peso dominicano equivale a un dólar.
7. Cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
8. Elaboración de cifras de la Dirección del Presupuesto, *Ejecución del Presupuesto*, varios años; véase también Vilas, 1973.
9. A título ilustrativo véanse, recientemente, los informes presidenciales presentados anualmente ante la Asamblea Legislativa: (*El Caribe*, 28 de feb. 76; *El Sol*, 28 feb. 77; *El Caribe*, 28 feb. 1978; etc.)
10. Entre ambos años la producción industrial creció de RD\$135.4 millones a RD\$480.6 millones; el empleo industrial, de unos 22,500 a casi 40,000 puestos de trabajo, y el capital por hombre ocupado, de RD\$4940 a RD\$8727. Cifras de la Oficina Nacional de Estadística, *República Dominicana en cifras*, y *Estadística Industrial de la República Dominicana*, varios años.
11. Cifras del BCRD, y de la Oficina Nacional de Estadística, *República Dominicana en cifras*, 1975.
12. El BCRD no calcula el impacto de la inflación en los estratos de ingreso familiar de más de RD\$600 por mes.
13. Véase un seguimiento de las inversiones de los principales grupos económicos en Vilas, 1973.
14. Véase BCRD, 1969; y sobre la evolución posterior Machicada, 1976.
15. De acuerdo a estimaciones recientes de la Secretaría de Estado de Trabajo (*El Caribe*, 1978).
16. Elaboración propia de cifras brindadas por la Oficina Nacional de Estadística. Los valores son producto de una estimación preliminar y no deben ser tomados más que como una ilustración de un panorama general. Se excluye al sector azucarero porque las cifras oficiales no desagregan al trabajador agrícola del obrero de fábrica.
17. Relación porcentual entre el excedente antes de los impuestos y la remuneración de la fuerza de trabajo, en la producción industrial (azúcar incluido), la minería y los servicios básicos. Estimación propia con base en cifras de ONE, s.f., varios años.
18. Arroz (-31%), yuca (-25%), batata (-46%), leche (sin variación), azúcar refinada (-33%), habichuelas (-54%), plátano (-65%), café (-14%), carne de pollo (-20%), pan (-41%), aceite de maní (-37%). Estimación preliminar sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadística. La reducción es un poco menor si se excluye a los obreros del azúcar (28.5%).

19. Véase ONE, 1971, y la tabulación de las fincas de menos de media hectárea (omitida en la publicación de los datos censales) efectuada por Dore y Cabral, 1974, p.44 y 55.
20. Entre 1972 y 1977 fueron asentados solamente 23,272 campesinos, de los cuales 15,000 en 1972 y 1973; véase Domínguez, 1978.
21. En lo que toca a la apropiación por particulares civiles y militares, de tierras, maquinarias, etc. del Consejo Estatal del Azúcar, véase *El Caribe*, 23 ag. y 28 set. 1978.
22. Por ejemplo: de acuerdo a una denuncia del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) la contratación directa de casi 400 obras, entre 1969 y 1975, significó para el Estado una erogación en exceso de 45% (un sobre costo de RD\$140 millones en un total de RD\$372 millones), (*Ultima Hora*, 25 jun. 1976).
23. Véase, por ejemplo, el discurso del industrial Víctor Espaillet Mera, transcrito en *El Caribe*, 24 jul. 1978, de una claridad conceptual y política poco frecuente. Véase también *El Sol*, 1978, con la transcripción de declaraciones en similar sentido del presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS).
24. Véase, recientemente, las declaraciones del secretario general del PRD, en *El Caribe*, 1 jun. 1978, y las del entonces presidente electo, en *La Noticia*, 2 jun. 1978.
25. No es ocioso recordar que en su visita a la República Dominicana como Secretario de Estado, en junio 1976, cuando se le preguntó al Sr. Kissinger si, en caso de producirse sucesos similares a los de 1965, Estados Unidos adoptaría nuevamente la decisión de intervenir militarmente, el funcionario simplemente declaró que no contestaba "preguntas hipotéticas" ... Véase *La Noticia*, 6 jun. 1976 (edición especial). De acuerdo a un cable transmitido por la agencia AFP, durante la crisis abierta por la suspensión del cómputo de los votos, un portaviones norteamericano fue divisado en las proximidades de la isla. Véase *La Noticia*, 18 mayo 1978.
26. Como se evidencia, por ejemplo, en las solicitadas de las entidades empresarias, y en los editoriales de los periódicos *El Caribe* y *Listín Diario*.

#### BIBLIOGRAFIA

- BCRD 1969. *Estudios sobre Presupuestos Familiares*
- BCRD 1978. Boletín mensual, junio.
- Corten, André, Mercedes Acosta e Isis Duarte. 1973. "Relaciones de producción en la economía azucarera dominicana", en *Imperialismo y clases sociales en el Caribe*, Buenos Aires, Cuenca Ediciones.
- Corten, André. 1974. "Valor de la fuerza de trabajo y formas de proletarianización", *Revista Latinoamericana de Sociología*, Buenos Aires, Vol. I, págs. 45-64.
- Del Castillo, José, y otros. 1974. *La Gulf & Western en la República Dominicana*. Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- Domínguez, Jaime R. 1978. "Un régimen que se proclamó agrarista pero sembró frustración en la mayoría del campesinado nacional", *El Sol*, Santo Domingo (periódico). 11 de agosto.
- Dore y Cabral, Carlos. 1974. *Impacto Socialista*. Santo Domingo, Vol. I, Núm. 2 (agosto). *El Caribe*, Santo Domingo (periódico).
- El Sol*, Santo Domingo (periódico).
- Estados Americanos, Organización de. s.f. *Presentación del Informe del Diagnóstico del Sector Minero de la República Dominicana*. (Presentado en "Primer Seminario sobre el Sector Minero", Secretaría de Estado de Industria y Comercio, Santo Domingo, 4-8 de julio de 1977).
- La Noticia*, Santo Domingo (periódico).

- Lange, Oscar. 1968. *La economía en las sociedades modernas*, México, D.F., Grijalbo.
- Machicado, Flavio. 1976. "Nutrición, distribución del ingreso y desarrollo agrícola", en: Varios Autores, *La desnutrición y sus implicancias sociales en la República Dominicana*. Santo Domingo, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales y Consejo Nacional de Población.
- Malagón, Virgilio. s.f. *Algunas consideraciones sobre la evolución del sector minero y su impacto en la economía nacional*. Presentado en el "Primer Seminario sobre el Sector Minero", Secretaría de Estado de Industria y Comercio, Santo Domingo, 4-8 de julio de 1977.
- Martín, J.B. 1966. *Overtaken by Events*. New York, Doubleday & Co.
- Moreno, José. 1976. *Intervention and Economic Penetration. The Case of the Dominican Republic*. University of Pittsburg, Center for Latin American Studies, Occasional Papers, January.
- Oficina Nacional de Estadística. 1971. *Censo Agropecuario Nacional*.
- Oficina Nacional de Estadística. s.f. *Estadística Industrial de la República Dominicana*.
- Oficina Nacional de Planificación. 1973. *Plandes 19*. Santo Domingo.
- . 1976. *Plandes 25*. Santo Domingo.
- Szulec, Tad. 1978. "Reflexiones sobre la crisis dominicana", *Opiniones Latinoamericanas*, Coral Gables, Vol. 1, Núm. 1, julio.
- Tigar, Michael y Madelaine Levy. 1977. *Law and the Rise of Capitalism*. Monthly Review Press.
- Ultima Hora*, Santo Domingo (periódico).
- Vilas, Carlos M. 1973. "La política de dominación en la República Dominicana", en: Varios autores, *Imperialismo y clases sociales en el Caribe*. Buenos Aires, Cuenca Ediciones.
- . 1974. *Estado y derecho en una economía dependiente*. Buenos Aires.
- Weffort, Francisco. 1973. "Clases populares y desarrollo social", en Aníbal Duyano, *Populismo, marginalización y dependencia*, San José, EDUCA.
- Wehaton, Philip. 1978. "Dominican Republic Elections", en *NACLA Report on the Americas*, Vol. XII, Núm. 4, Jul.-Aug.

**ABSTRACT**

Elections recently held in the Dominican Republic mark the end of the Joaquín Balaguer's prolonged presidency (closely related to the 1965 invasion and to the expansion of transnational corporations), and also the apparent culmination of one period of economic growth and transition to another. In this article the author presents an analysis of outstanding economic and sociopolitical features of this period and explores some trends that are visualized from the present juncture.